10 Colombia Rebelde

Presentación

En este número 10 de la revista Internacional Colombia Rebelde queremos compartir con ustedes reflexiones que apuntan a la paz, que se ha colocado en una primera prioridad e imperativo para Colombia como contribución a una nuestra América como Territorio de Paz.

Desde la sociedad colombiana se ha emprendido la marcha hacia un movimiento de paz que sea sujeta activa en este camino. Por ello damos a conocer distintos pronunciamientos concluyentes de foros y congresos y otras dinámicas, asi como una reflexión sobre la experiencia que se construye en el País Vasco, pueblo que lucha históricamente por su independencia, libertad y el socialismo.

Esperamos que nos sigan acompañando en este empeño de una Colombia digna, soberana y de justicia social.

Comité editorial
Revista Colombia Rebelde

ELN LA RESISTENCIA Y LA LUCHA POR LA PAZ

Colombia vive una tensa pulseada entre la paz y la guerra donde no solamente se confrontan fuerzas militares, sino también se confrontan ideas sobre el significado del concepto de la paz.

Para las élites del país, paz es sinónimo de pacificación, de la desaparición de la insurgencia como sujeto político-militar. Para éstas, el actual proceso de paz tiene el propósito de darle vía libre a la locomotora neoliberal (extractiva-primario-exportadora) por todo el ancho y largo del territorio nacional. Es la esperanza de acercarse un poco a la utopía capitalista de una Colombia sin resistencia insurgente. Desde el punto de vista del Estado, los diálogos de paz tienen como objetivo supremo lograr una fórmula que permita desarmar y desmovilizar a la insurgencia, y a la vez dejar intacta la estructura política económica del país. Dicho de otra manera, el Estado quiere una "paz barata para el capital, para que todo siga igual", como lo he expresado, en reiteradas ocasiones, una paz donde la insurgencia ceda en todo, sin que las élites cedan nada.

En contraste, para nosotros, el ELN, la paz son cambios, son transformaciones en las relaciones económicas y de poder de tal forma que haga viable construir un país en paz. Pero si el modelo político y económico siguen sin inmutarse, la paz será siempre inviable. En ese sentido, el ELN distingue bien entre el "fin del conflicto armado" y la construcción de la paz. El primero es algo que le compete a los actores del conflicto: a decir, guerrilla, gobierno, paramilitares, mercenarios extranjeros, empresas, etc.; mientras lo segundo es menester del conjunto de la sociedad colombiana, en particular de sus sectores más marginados y explotados. Para ellos la paz está íntimamente relacionada con el acceso a un empleo digno, a la salud, a la educación, a pensiones, a servicios decentes, a una economía productiva que les permita sobrevivir. Dicho de otra manera, la paz implica una mínima dosis de justicia social.

Otro factor determinante que permitirá lograr el fin de la guerra es el tratamiento que el Estado le dará en el futuro a los conflictos sociales, políticos y económicos. Las políticas de Seguridad del Estado, que se sustenta en la existencia de un "enemigo interno", sigue intacto, y si hemos de guiarnos por las reiteradas declaraciones del gobierno, no tiene intenciones de modificarla. Es decir, el Estado, en un posible escenario futuro

de paz, seguirá buscando enemigos internos. Su rechazo absoluto a considerar siquiera debatir sobre la doctrina militar como parte del proceso de paz, representa un obstáculo mayor.

Promesas, certezas y La obstinación de los hechos

La paz es una promesa del futuro, por la que estamos empeñando los esfuerzos vitales del ELN, pero no deja de ser una promesa. El ELN actúa en base a las certezas, y la certeza del presente es la guerra. El Estado se ha negado a un cese bilateral, mantiene su ejército de medio millón de efectivos, aumentó el presupuesto de defensa, continua reclutando soldados y comprando armamento y equipos militares. Los hechos son obstinados, y éstos pintan un presente de guerra y, si no hay modificaciones en el modelo económico-político que la genera, y en la doctrina militar, el futuro también será de guerra.

Pese a ello, el ELN en el V Congreso, la máxima autoridad, ratificó de manera unificada nuestra voluntad de avanzar en la búsqueda de la paz. Y en ese espíritu concluimos:

"Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas."

Paz, conflictos y resistencias

El ELN no concibe la paz como ausencia de conflictos, pues el conflicto es inherente de toda sociedad humana, y en ello reside la gran falacia en el concepto de "post-conflicto", pues los conflictos no desaparecerán luego de la firma de la paz. Ahora bien, el tratamiento que cada sociedad le da a sus conflictos es un termómetro confiable del nivel de democracia que en ella existe. Si es capaz de resolverlos por la vía del dialogo y el consenso, en el marco de un modelo de sociedad donde las mayorías puedan decidir sobre el futuro del país.

Ahora bien, el ELN tampoco concibe la paz como la ausencia de resistencia, pues mientras persista este modelo de acumulación capitalista basado el despojo y depredación de los territorios y de la Madre Tierra, persistirán la resistencias de las comunidades. Cómo se desarrolla y se expresa esa resistencia dependerá de cómo el Estado responde. Si responde con el terrorismo de estado -su costumbre histórica - las comunidades se verán obligadas a defenderse. Pero si el Estado permite que la oposición política florezca sin recurrir a la violencia como mecanismo de sustentación de su hegemonía, las armas sobrarán.

La falacia del DDR

El Estado persiste en la idea del Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) como fórmula central de para llegar al fin del conflicto. Para el ELN, los instrumentos (las armas) no son lo central, sino las causas detrás del conflicto: cuando éstas se puedan ir resolviendo por las vías democráticas, las armas se convierten en un estorbo. El ELN tampoco contempla la desmovilización, pues seguiremos movilizados en la resistencia. La reinserción es otra falacia, ya que el ELN forma parte de la sociedad, es una de sus expresiones legítimas y seguirá formando parte de ella, del tejido social que nos parieron y que nos han sostenido durante medio siglo.

El futuro, después de una eventual firma de paz, es un futuro de resistencia, de movilización, de lucha por la vida digna de las comunidades y de la clase popular colombiana, de confrontación a la depredación capitalista. Para ese escenario se prepara el ELN.

La última palabra la tiene el Estado, porque es éste quien mantiene un poderoso ejército, recursos sin límite, el poder de las instituciones y los medios de comunicación de su lado. En sus manos está el futuro del país:

"El gobierno de Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos."

Colombia
Rebelde

REVISTA INTERNACIONAL
F.INT. CTE. MILTON HERNÁNDEZ
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

EDICIÓN
No.10 / Agosto - Octubre de 2015

CONSEJO EDITORIAL
Dirección Frente de Trabajo Internacional
Comandante Milton Hernández

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Colectivo Gráfico
Frente Internacional Milton Hérnandez

IMPRESIÓN
Talleres de la Nueva Colombia

DISTRIBUCIÓN
Sistema Inforamativo Patria Libre
SINPAL - ELN

Se autoriza la reproducción y distribución total o parcial de esta revista, siempre y cuando se cite la fuente.

CONSULTELA EN:
www.eln-voces.com

SUMARIO

EDITORIAL:
El ELN, La Resistencia y La Lucha por la Paz
Pág. 03

Mensaje N.16
FF.AA. Colombianas
pág. 08

Declaración del Congreso de Paz
pág. 12

Congreso para la Paz
pág. 12

Manifiesto por la Tierra y la Paz, El Dialogo es la Ruta
pág. 16

Declaración Final
II Foro por la Paz de Colombia
pág. 20

El Conflcito Vazco
Y la Paz Ezquiva
pág. 25

Segunda Asamblea
Nacional por la Paz
pág. 25

Mensaje N.16

FF.AA. Colombianas

Señoras y señores de las FF.AA colombianas, con motivo de este nuevo mensaje, les reitero mi saludo respetuoso.

Enviamos nuestra fuerza a todos los pueblos y naciones que padecen la guerra imperialista. Es tiempo ya de reconocer a Palestina como Estado libre y soberano, y respetar a Siria en su derecho a la autodeterminación.

En los días recientes, su Comandante en jefe, el presidente Santos, señaló que ustedes serían los encargados de brindar seguridad a una fuerza política que surja de un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto armado interno que padece Colombia.

Cabe preguntarnos todas y todos los colombianos, si ustedes de verdad están preparados para proteger a la oposición política ya que hoy esa no es la realidad.

Para motivar la reflexión, planteo varias preocupaciones.

A las Fuerzas Armadas colombianas se les ha instruido bajo la doctrina imperialista de la Seguridad Nacional, donde los principales enemigos a eliminar son la insurgencia armada y todo brote de inconformismo social. Para eso se implementó, el Terrorismo de Estado, que ha anegado de sangre el territorio colombiano, generando la crisis humanitaria que vivimos, con millones de víctimas. Esta tenebrosa doctrina es lo primero que se debe cambiar para poder hablar de paz.

A las FF.AA. no se les ha formado para comprender que la insurgencia colombiana son organizaciones de mujeres y hombres de origen popular en su gran mayoría, que ante un régimen de explotación, exclusión y represión contra el pueblo colombiano, asumió el derecho a la rebelión y ello los llevó al alzamiento armado.

Que dicho fenómeno data de más de medio siglo y no sólo se dio en Colombia, sino en casi todos los países latinoamericanos.

A ese alzamiento en armas, se sumaron prestigiosos dirigentes populares nacionales y extranjeros, cuya participación libertaria ha dejado huella en la historia patria.

En este más de medio siglo de alzamiento armado, junto a la persistencia tesonera, altruista, de altos niveles de sacrificio y significativos desarrollos políticos, ideológicos, filosóficos, económicos y sociales de los que se dotaron dichas fuerzas guerrilleras, lograron además cubrir con sus fuerzas, buena parte de los territorios del país.

Así mismo, establecieron a su interior una juridicidad insurgente, no solo de regulación para sus fuerzas, sino para la regulación de la vida y convivencia de los pobladores, donde no hace presencia el Estado, o la hace sólo con sus FF.AA, como ejército de ocupación en operaciones punitivas.

Dichas fuerzas insurgentes hemos reiterado el respeto al DIH y tenemos una juridicidad insurgente, plasmada en estatutos, códigos y reglamentos como cualquier ejército del mundo; además una juridicidad política insurgente, ya que no sólo somos un ejército, sino unas fuerzas políticas, con la particularidad de estar levantadas en armas.

En el caso particular del ELN, hace mas de 35 años con mucha mas claridd, que la insurgencia debe dedicar sus mayores esfuerzos al trabajo con las masas sin exclusiones creando una relación de armonía sustenta en el Poder Popular donde son esas masas organizadas, la máxima autoridad, por encima de la insurgencia misma.

Vale destacar que dentro del desarrollo de esa regulación y acción política, nos regimos por principios organizativos, para el desarrollo de todas nuestras actividades donde el elemento rector, es la democracia.

Para el ELN, es determinante el respeto a la organización popular y social, porque el objetivo no es meramente crear un ejército que tome el poder, sino que se trata de empoderar al pueblo. Por eso se otorga un papel preponderante a la lucha de las comunidades, que existen en ciudades y campos a lo largo y ancho del país.

La insurgencia representa una parte importante de un nuevo Estado, que se va creando en el curso de esta lucha de más de 50 años, unida o en el mismo proceso de lucha popular y social.

Es por ello que, ahora que el Gobierno se dispone a dialogar con la insurgencia, el ELN acude con seriedad y responsabilidad, buscando examinar si efectivamente se van a dar las transformaciones que

permitan el ejercicio pleno de la oposición política, sin la necesidad de usar las armas como ha tocado hasta hoy, para poder luchar por los derechos conculcados y sobrevivir.

Debo reiterarles otra vez, que el ELN no está en esfuerzos por la paz solo ahora, sino hace más de 23 años, porque desde entonces estamos convencidos que es mucho mejor luchar dentro de un sistema democrático que desde el alzamiento armado, pero que dicho sistema hay que crearlo entre todos.

Sea pertinente agregar que en 50 años de actividad insurgente, hemos cometido errores y ha sido indispensable retomar la sabiduría popular y revolucionara para corregirlos y seguir construyendo. Ha sido política del ELN asumir públicamente los errores cometidos y trazar correctivos para tratar de evitar que se sigan cometiendo.

Ustedes señoras y señores de las FF.AA. colombianas, se han especializado en guerra contra insurgente y están asesoradas, armadas y entrenadas por los ejércitos de EE.UU, Israel y otros países que les han proporcionado la experiencia de sus guerras de invasión y sometimiento contra varios pueblos del mundo.

A ustedes los han contra informado, para insensibilizarlos frente a las justas luchas sociales y por el respeto a la soberanía. A muchos de ustedes que han sido entrenados en las escuelas del Comando Sur de los EE.UU, los enseñaron a torturar, a usar métodos de exterminio social y en las campañas de tierra arrasada. Como alumnos aventajados, hoy las FF.AA colombianas exportan mercenarios para otras guerras que se desarrollan en el mundo.

Un asunto nodular que les han enseñado es que en Colombia hay un enemigo interno que es indispensable combatir hasta destruirlo y dicho enemigo interno es la guerrilla y la población que ustedes consideran que les ofrece apoyo. Deben exterminarnos porque según ustedes somos, comunistas, terroristas, criminales, bandoleros, narcotraficantes y muchos otros descalificativos satanizadores.

En esta inhumana actividad se involucró a fondo la brigada 20 y el batallón Charri Solano, sobre quien recayó la creación de los primeros grupos paramilitares comenzando la década de los 60s. Por instrucciones del Pentágono.

Con el correr de los años de acción contrainsurgente, los señores del poder, le asignaron a las FF.AA. colombianas la tarea clandestina de capacitación, apoyo y accionar coordinado con los grupos paramilitares, con el objetivo de acabar ese enemigo interno destruyendo su base social y vinieron las peores masacres de población en las llamadas "zonas rojas", porque dicho objetivo no era posible solo dentro de los marcos legales.

Señoras y señores, estas afirmaciones se corroboran con las alarmantes cifras, donde el Estado colombiano ocupa uno de los mas altos lugares en la realización de masacres, destierros, desapariciones forzadas, presos políticos y exterminio de dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Sin duda esta triste página ha sido orientada desde los altos estrados del poder y a una parte importante de ustedes les correspondió, por la vía de los Generales de las FF.AA. cumplir sus órdenes.

Es por esto y otras realidades de la vida y la historia de Colombia, que no caben en un par de cuartillas, que debo afirmar que aun falta mucho para que las FF.AA. colombianas comprendan el origen y desarrollo histórico y político de la insurgencia para que de esa manera pueda aportar de manera eficaz, al soñado momento que todos queremos, donde se pueda hacer política sin armas desde los espacios legales.

Mi llamado al presidente Santos, a encabezar al interior de las FF.AA, donde no dudo que hay muchos hombres y mujeres inteligentes, sensibles y de altas calidades, una verdadera pedagogía para la paz, cambiando los enfoques sesgados de la contrainsurgencia con los que las FF.AA han sido formadas y asumir una verdadera concepción patriótica, nacionalista donde el soldado vea a los humildes como sus verdaderos hermanos y compatriotas y no como sus enemigos.

Aceptando que todos somos colombianos con diversidad de pensamiento se hace indispensable una visión y convicción pluralistas de la vida, única manera de convivir sin llegar al extremo de matarnos por las diferencias.

Bienvenida la paz que signifique bienestar y convivencia para todos, sin renunciar al derecho de disentir y luchar por las convicciones que tenemos todas y todos.

Declaración del Congreso de Paz

Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.

Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo.

Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz.

Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo.

Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político y la riqueza, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por:

Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, que democratice los medios de producción y las fuentes de riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo.

La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.

Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar de paz.

Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra

contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El conocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!

Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema

histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base

para una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.

Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la

permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del

derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.

Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía

nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa

nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.

Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de

convivencia, y que libere la re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el

deporte y la recreación.

Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros.

Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna. Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro decendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.

En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:

1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.
2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.
4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.
5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales.

Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.

CONGRESO PARA LA PAZ

PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ

PARA LA VIDA DIGNA

El Dialogo es la Ruta

Manifiesto por la tierra y la paz

Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política.

Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz.

Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado.

Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales, favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país.

Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano.

Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo.

La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población.

Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos". La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad.

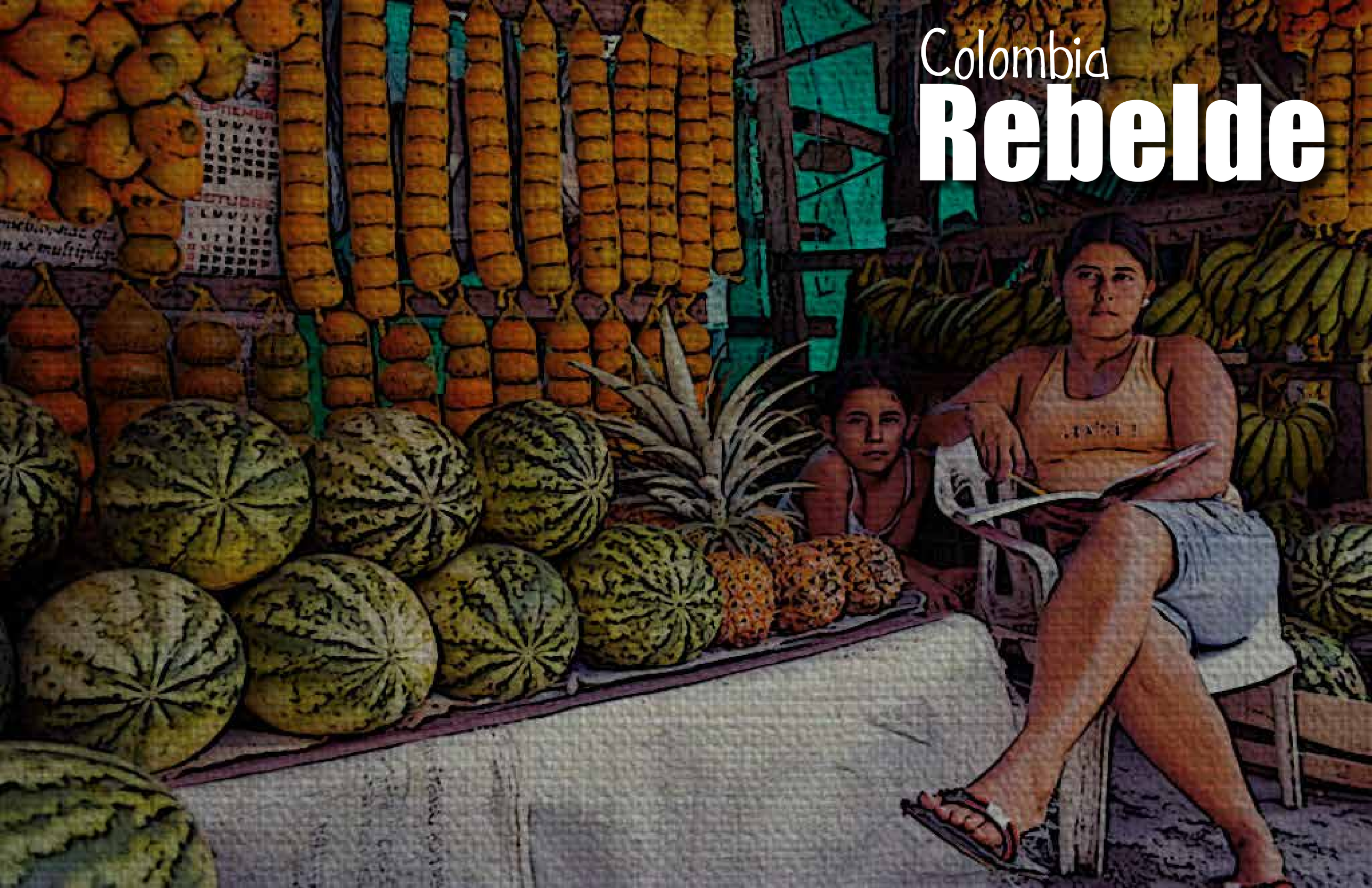
Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz.

Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo.

Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas.

Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. "Todas las voces todas, todas las manos todas", de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas



Colombia Rebelde

perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años.

Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales.

Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional.

Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social.

Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro.

ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA. EL DIALOGO ES LA RUTA

BARRANCABERMEJA 14 DE AGOSTO DE 2011

II Foro por la Paz de Colombia

Declaracion final

Montevideo, Junio 7 de 2015

Reunidos en el II Foro por la Paz de Colombia: 120 organizaciones y movimientos sociales y políticos, más de 800 ciudanados/as latinoamericanos/as, exiliados/as de la hermana Colombia, académicos/as e intelectuales, artistas, parlamentarios/as, luchadores/as sociales y populares, trabajadores/as urbanos, campesinos/as, indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGBTI, jóvenes y estudiantes, de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, México,Paraguay, País Vasco, Uruguay y Venezuela, declaramos unánimemente nuestro compromiso con la vida y la democracia, valores que esperamos superen los desastres de la guerra y la muerte.

En cumplimiento de este ideario expresado también en las bases constitutivas de la Unasur y la Celac, que defienden la paz como imperativo ético, con el cual se pretende avanzar en la integración regional, constituyendo a Latinoamérica como una región de paz, democrática y con justicia social, declaramos:

Que nos encontramos en Montevideo, una diversidad de pensamientos y de proyectos colectivos en un ambiente solidario, reflexivo, esperanzador y deliberativo en la búsqueda de la paz con justicia social para Colombia y de todo nuestro continente; abrazados por el pueblo uruguayo y sus más representativas expresiones organizativas, quienes nos han permitido pisar las calles que tienen grabadas las huellas imborrables del General Artigas, Benedetti, Galeano, Liber Arce y de todo el heroico pueblo uruguayo; haciéndonos sentir con todas las fuerzas, los vientos de cambio de época y las voces por independencia que recorren todos los territorios de Nuestra América.

Que estamos convencidos del triunfo de los procesos sociales y políticos anti-neoliberales que recorren todo nuestro continente, que vienen marchando con obstáculos, pero sin pausa, permitiendo el comienzo del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, nuestra querida República de Cuba. Al tiempo que manifestamos nuestro rotundo rechazo a toda la estrategia de desestabilización del legítimo gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela y particularmente del decreto Obama.

Reivindicamos sin titubeos que las Malvinas son Argentinas y de nuestra américa. En general, nos oponemos a toda forma de intervención militarista en cualquier país

de Latinoamérica, por lo cual exigimos la abolición de las bases militares estadounidenses y europeas en la región, puntas de lanza contra la soberanía de Colombia, Paraguay, Honduras, Argentina y toda Nuestra América.

Que para transitar hacía un continente libre del militarismo, debe ser superado el largo conflicto social y armado colombiano, que ha dejado millones de víctimas, hombres y mujeres en situación de desplazamiento forzado, desaparecidos/as, asesinados/as, exiliados/as, prisioneros/as políticos/as.

Para lo cual es necesario el desmonte real de los grupos paramilitares y los obstáculos militaristas que constituyen uno de los principales obstáculos para la implementación de los posibles acuerdos de paz.

La sociedad colombiana tiene en el proceso de paz una oportunidad histórica para concretar su voluntad de justicia social, democracia y soberanía, con las cuales, las generaciones venideras podrán crecer, expresarse libremente y vivir dignamente.

Por ello, respaldamos totalmente los diálogos de paz que se realizan en La Habana entre el gobierno dirigido por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-EP, entendiendo que existe la voluntad popular de Colombia y Nuestra América para lograrlo. En este sentido entendemos que para lograr una paz estable y duradera, también es necesaria la apertura del diálogo efectivo con las insurgencias armadas del Ejército de Liberación Nacional-ELN y el Ejército Popular de Liberación-EPL.

Respaldamos la declaración de los países garantes del proceso de paz: Noruega y Cuba, en el cual afirman la necesidad de un inmediato cese bilateral al fuego, permitiendo que el diálogo y la palabra primen sobre el estruendoso ruido de la guerra. Esto generará un ambiente de confianza para que la sociedad colombiana y las partes se dirijan con más fuerza hacía un acuerdo de paz estable y duradero.

En consecuencia, entendemos que el único camino posible es la unidad del pueblo colombiano. Con alegría reconocemos y saludamos los avances y acumulados en iniciativas como el Frente Amplio por la Paz con justicia social, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular, y otros procesos de convergencias; para éstas y para todo el pueblo colombiano, pedimos el respeto por sus derechos humanos y la acción plena del ejercicio político, sin que sean intimidados/as, judicializados/as o amenazados/as.

Solicitamos garantías políticas y humanitarias para las elecciones locales y departamentales en octubre de 2015, frente a lo cual esperamos contribuir en la construcción de una misión de observación electoral que acompañe diferentes regiones del país.

En este sentido también solicitamos la suspensión de las detenciones arbitrarias a dirigentes sociales, los montajes judiciales, la criminalización de la protesta social. Proponemos una vez más una visita de observación sobre la situación de los/as prisioneros/as políticos/as, para contribuir a la garantía de condiciones dignas en las cárceles de Colombia. Pero sobre todo somos solidarios son la exigencia de libertad para los casi 10.000 prisioneros/as políticos/as en ese país.

Que recibimos con esperanza la realización del I Foro Parlamentario por la Paz de Colombia, el que permitió la constitución de la red de parlamentarios/as por la paz de Colombia.

En coherencia con todo lo anterior, proponemos crear diversas redes de trabajadores/as, de comunidades agrarias (campesinas y étnicas), de defensores/as de derechos humanos, de jóvenes y estudiantes, de artistas e intelectuales y de mujeres. Desde las cuales asumamos la difusión y acompañamiento a la lucha por la paz con justicia social en Colombia; organicemos visitas de solidaridad a Colombia; coordinemos encuentros y foros por sectores; asumamos la Campaña "Yo te nombro Libertad" y otras campañas que fortalezcan y dinamicen esas luchas.

Así mismo, asumimos la revisión cuidadosa de todas las propuestas realizadas a lo largo de este II Foro por la paz de Colombia para que podamos materializarlas. Nos comprometemos en la conformación de una delegación que lleve las conclusiones de este Foro a la mesa de diálogos en la Habana.

Y, finalmente, nos comprometemos, desde ahora, en la organización y participación de una tercera versión de este Foro.

Somos todos y todas Colombia, estamos en el camino de la unidad Latinoamericana continuando la tradición, artiguista, san martiniana, martiana y bolivariana.

Somos más, ahora sí la paz de Colombia con justicia social, democracia y soberanía, por una Latinoamérica libre de militarismo y donde se respeten efectivamente los derechos humanos.

Vamos juntos compañeros y compañeras

N. Bares y M. Rubio

Breves apuntes

El Conflicto Vasco y la Paz Ezquiva

1. Los orígenes

Durante los últimos 50 años, desde el nacimiento de la organización revolucionaria ETA (Euskadi ta Askatasuna-Euskadi y Libertad), la lucha por el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria como pueblo se ha desarrollado en una estrategia político-militar. En su evolución histórica, cada uno de los elementos han variado sus importancia y se han producidos infinidad de cambios organizativos: desde escisiones (como por ejemplo, entre ETA político-militar y ETA militar), a creaciones de nuevas organizaciones (ej: Herri Batasuna).

Este accionar político y armado fue la respuesta dada en un durísimo contexto de brutal represión tras la victoria de Franco y los largos años de su dictadura.Después de la muerte del dictador, los poderes ficticios del Estado dieron lugar a una falsa "transición a la democracia" que tenia como objetivo desmovilizar a las masas trabajadoras y a los nacionalismos periféricos, ante el peligro real de ruptura, consecuencia de una grandisima capacitad de movilización y lucha de la clase obrera.

Ante la falta de libertades básicas en la nueva falsa "democracia", se continúo con el accionar político, las movilizaciones de masas y la lucha armada. Es en estos años, como resultado de la confluencia de varios partidos políticos, se crea "Herri Batasuna" ("Unidad Popular"), que se convertirá durante mucho tiempo en la base político-institucional de la izquierda independentista vasca.

2. La ofensiva de terror enemiga

En la ultima década, la ofensiva contra el proyecto de la IA (Izquierda Abertzale) es total. Se pone en marcha una política de ilegalizacion bajo el ar-

gumento de que "todo es ETA". Bajo esta justificación se cierran medios de comunicación, se ilegalizan formaciones políticas, se ilegalizan organizaciones del movimiento popular, se ilegalizan candidaturas electorales. Todo ello, con continuas operaciones policiales masivas, con decenas de detenidos, incomunicados y sistemáticamente torturados, y con macro juicios sin ninguna garantía jurídica donde cientos y cientos de militantes son condenados a largas penas en lejanas prisiones y sometidos a régimen penitenciario brutal.

Este accionar lleva a la IA (Izquierda Abertzale) a una larga etapa de "clandestinidad", donde cualquier actividad, por inocente que fuera, es señalada como "terrorista". En este clima de caza de brujas, especialmente tenaz contra la juventud vasca y sus organizaciones, se dificulta la comunicación con la sociedad, se tiende a la autodefensa, a encerrarse en sus feudos. Aun así, el movimiento popular tiene mucha capacidad. Se desarrolla una enorme capacidad de respuesta anti-represiva; pero pierde capacidad propositiva para el desarrollo del proyecto estratégico y su socialización. La defensa de los Presos Político es el eje fundamental aglutinador en las calles.

Por otra parte, tras la frustración por el fracaso en 2006 del ultimo proceso de negociación entre la Organización armada "ETA" y el entonces gobierno socialista de Rodrigo Zapatero (a la cual participa también una delegación de máximo nivel de la organización política e institucional en aquel entonces ilegalizada) y sobre todo, tras los atentados del 11 M en Madrid, el coste social de cada acción armada de ETA es cada vez mayor.

La suspensión de la tregua declarada durante la negociación produce unas acciones que no tienen nexo con las luchas populares del momento y se basan en su mayoría en atentados personales que causan muertes; acciones que causan también cada vez un mayor rechazo en gran parte de la sociedad vasca y más voces criticas dentro la Izquierda Abertzale. Es una dinámica de "Guerra de baja intensidad" que viene a ser compatibilizada por el Estado Español, que la explota al máximo como elemento permanente sea de militarización y represión del conflicto histórico y político existente, que como "emergencia" que necesita "unidad nacional" y que alimenta consenso y cohesión entorno a una clase política corrupta y a las políticas sociales de sangre y lagrimas que se van adoptando.

Mientras los aparatos del Estado se encuentran cómodos en este contexto y saben sacar ganancias, muchos sectores sociales (también en los sectores de la izquierda del resto del estado) encuentran la excusa perfecta para no participar en las luchas, en marchas y para no movilizarse ante la vulneración masiva de derechos que se produce en Euskal Herria.

3. Cambio de rumbo

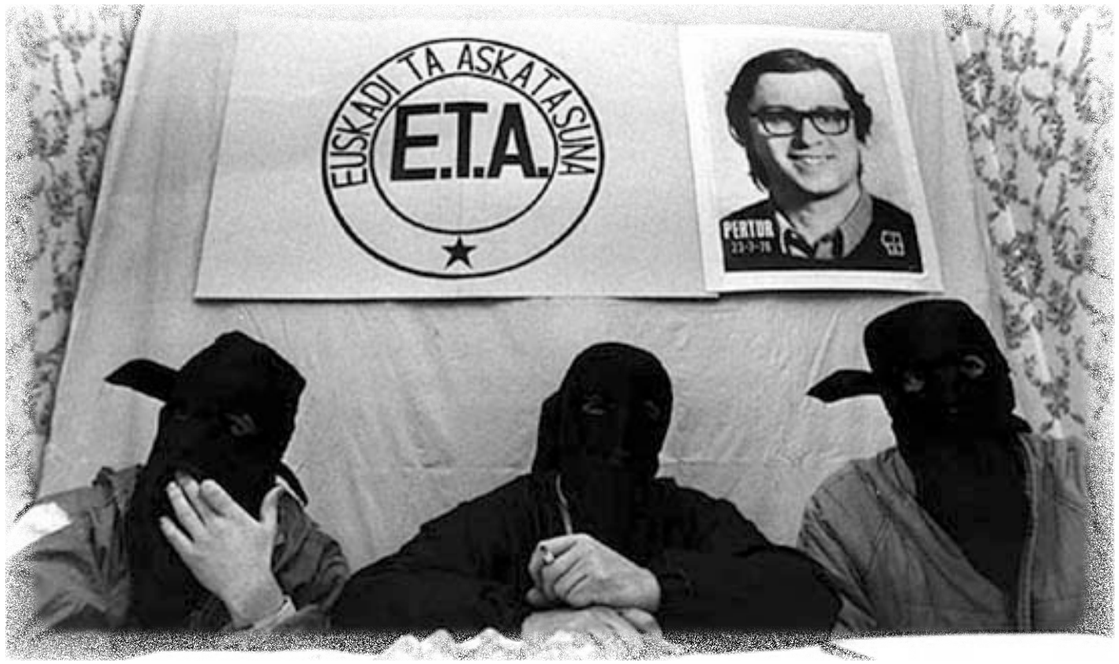
En esta difícil tesitura, se ve la necesidad de un cambio de rumbo, de un nuevo salto de paradigma que permita elaborar una nueva estrategia. Para ello, se inicia un largo y amplio proceso de debate dentro de todas las organizaciones de la Izquierda Abertzale y dentro de ETA para considerar adecuada o inadecuada la estrategia político-militar y la necesidad de entrar en una nueva fase únicamente política, cerrando definitivamente el ciclo de confrontación armada con los estados imperialistas español y francés.

Todo este proceso de debate es duro y no exento de muchos momentos de tensiones, pero al mismo tiempo se transforma en un verdadero proceso asambleario al cual participan miles de militantes. Un debate colectivo que tiene lugar en un contexto internacional, europeo en particular, de nueva ofensiva neoliberal, que pretende aprovechar las consecuencias de la explosión de la burbuja financiera para llevar los derechos de la clase trabajadora a las condiciones del siglo pasado.

En Euskal Herria así como en el Estado Español, el nuevo gobierno de derecha del Partido Popular, con Mariano Rajoy como líder, pisa a fondo el acelerador de la ofensiva capitalista dirigida por la Troika. Los sectores populares son duramente golpeados (paro, cierre de impresas, desahucios, retirada de ayudas sociales) y se arremete contra los servicio públicos como sanidad, educación y seguridad social.

El debate termina al final del 2010 y se concretiza en la decisión de cambiar la estrategia de los últimos 50 años e iniciar una nueva fase basada en el concepto, bastante contradictorio, de la confrontación democrática. Se apuesta por revitalizar la lucha institucional, superando los años de ilegalización, pero también la lucha ideológica, la de masas y la desobediencia civil. En este contexto asume un carácter totalmente novedoso la decisión importante de no volver al guión ya muchas veces experimentado de negociación directa y exclusiva entre ETA y los Gobiernos de turno, iniciando un proceso unilateral de reconversión de la lucha armada hacia una acumulación de fuerza política y social que permita avanzar en el camino de autodeterminación del Pueblo Vasco.

La concreción mas importante de estas decisiones se plasma con la organización en la famosa ciudad vasca de San Sebastián, en el octubre del 2011, de la llamada "Conferencia Internacional de Paz" a la cual participan como promotores y protagonistas personalidades, entre otros, como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Ge-



rry Adams y Jonathan Powell. La decisión de "internacionalizar" la resolución del Conflicto, eludiendo así el esquema de negociaciones exclusivamente "internas", es fruto también de un trabajo de relación y asesoramiento que, después del fracaso de la ultima tentativa de proceso de paz con Zapatero (consumado por la inmutable posición del Gobierno sobre la idea de "Paz en cambio de presos") la dirigencia de la todavía ilegalizada Izquierda Abertzale empieza a tejer fuertes relaciones con fuerzas de izquierdas y gubernamentales de Sur-Africa e Irlanda.

Este formado, de evidente empate mediático y legitimación internacional de los actores vascos, pensado como un instrumento que resolviera las dificultades y el bloqueo del Partido Socialista Obrero Español, se pone en marcha cuando al Gobierno llega la Derecha española mas rancia, neofranquista y nacionalista del Partido Popular. Sin embargo el éxito internacional de la Conferencia y su declaración conclusiva abren la puerta a la construcción de una "lobby" de presión vasca con presencia muy importante a nivel internacional, en el evidente intento de emular parte de los precedentes procesos de resolución de los conflictos vividos en otros países.

Pero mas que todo, permite al mismo tiempo, crear mayor visibilidad a ETA, dando el paso decisivo luego el histórico anuncio de abandono definitivo de la lucha armada, realizado el 20 de octubre, respondiendo así positivamente - solo después de tres días- a unos de los cinco puntos de la "Declaración de Ayete" que clausura la Conferencia internacional.

Este cambio de estrategia persigue renovar el proyecto de Izquierda Abertzale, darle fuerza, adaptarlo a los parámetros de la UE (donde han desaparecido los conflictos armados históricos, sea nacionales, de clase) y, sobre todo, sumar nuevas mayorías sociales y electorales que permitan una nueva hegemonía. Ello tiene su plasmación en el ámbito electoral, donde se crean nuevas coaliciones de partidos que permitan ir superando las consecuencias de las ilegalizaciones y en las que se reúnen las bases históricas de la Izquierda Abertzale, la socialdemocracia nacionalista del partito "Eusko Alkartasuna" y la izquierda estatalista con más sensibilidad ante el hecho diferencial del País Vasco ("Alternatiba").

Posteriormente se unirá una escisión neo-reformista, formalizada en la década anterior, de la propia Izquierda Arbetzale ("Aralar"). Hay que tener en cuenta que esto comienza con una Izquierda Arbetzale con su principal partido todavía ilegalizado, una carga represiva enorme, gran parte de sus dirigentes y cuadros mas preparados encarcelados.

4. Los retos del viraje

En teoría, los objetivos estratégicos de independencia y socialismo se mantienen, pero en seguida queda claro que el segundo, el del socialismo, queda relegado a un segundo plano con el objetivo de hacer mas fácil atraer a mas amplias mayorías, ideológicamente variadas. Todo ello en un contexto de ofensiva contra las clases populares, donde se hace mas necesaria que nunca la apuesta por un sistema social distinto al actual.

La Izquierda Abertzale decide formalizar un nuevo partido, "SORTU", que sirva de motor político en toda esta nueva fase. Pero en el debate de sus estatutos comienzan a verse signos preocupantes de una cierta deriva ideológica, de poca claridad organizativa y de plegamiento a la terminología ajena totalmente a la historia y cultura política de la Izquierda Abertzale.

Así, la nueva estrategia debe hacer frente a varias tareas urgentes: la

resolución del conflicto armado y sus consecuencias; sobre todo la situación de los mas de 500 presos políticos, de las y los refugiados y huidos, la desmilitarización y el destino de los militantes en activo de la organización armada y, en fin, todo lo del desarme. También clarificar el papel de SORTU y su autonomía frente a la coalición con otras fuerzas políticas. No menos importante es poner en marcha nuevas estrategias de conflicto social que mantenga el pulso de la lucha y no deje abandonados sin instrumentos a amplias capas populares golpeadas selvajamente por el capitalismo. Analizar a fondo lo de la gestión institucional, el electoralismo-parlamentarismo y la relación con los movimientos sociales y populares.

5. El Estado mantiene sus políticas

Mientras la Izquierda Abertzale apuesta por este camino, los poderes del Estado mantienen intacta su política de guerra: sigue la represión, las detenciones, la tortura, los encarcelamientos. Se pone mano-una vez mas- al Código Penal, aprobando juntos, el Partido Popular y el Socialista, una ley que extiende por primera vez la pena por terrorismo hasta la Cadena Perpetua. Desde el 1 de julio de 2015 entra en vigor también la llamada "Ley Mordaza", una articulada disposicion legislativa represiva que transforma en delito y castiga con la cárcel muchísimas actividades sociales y políticas de contestación y protesta.

Asimismo, las exigencias a la Izquierda Abertzale son cada vez mayores: se le exige que renuncie a sus señas de identidad, que reniegue de su pasado, que pida perdón y que ceda una y otra vez. Todo ello, de forma unilateral, sin ninguna lectura autocrítica por parte de los poderes del Estado español y de su sucursal autonomista, el histórico garante de los intereses de la burguesía in tierras vascas, el derechista Partido Nacionalista Vasco.

Paralelamente, no se posibilita ningún avance en el punto más sensible, el de los y las presas políticos, a quienes se sigue aplicando el Estado de Excepción y las leyes especiales, llegando a desobedecer hasta la doctrina comunitaria europea en temas como el descuento de pena en el acumulo de condenas por el mismo delito y la imposibilidad del carácter retroactivo de una condena.

Esta situación crea malestar en distintos sectores de Izquierda Abertzale. La reivindicación histórica del entero Movimiento Nacional de Liberación Vasco por la Amnistía presenta dificultades o es apartada, avanzando en cambio en una genérica demanda de respecto a "las normativas españolas y europeas" para la tutela de los Derecho Humanos de los presos. La salida de los prisioneros enfermos y el final de la política de dispersión de los militantes de Euskal Herria en cárceles lejanas miles de kilómetros se transforman en el único eje de las peticiones políticas. El tema de los presos parece quedar en un segundo plano en la agenda política, mientras el Estado sigue golpeando a todo lo que se mueve entorno a los presos, intentando cortar todas las vías de solidaridad y compromiso (redadas masivas, ilegalizaciones, detenciones de abogados, medicos, familiares…), elementos tan arraigados en Euskal Herria y que siguen produciendo, en la actualidad, las mas masivas y multitudinarias manifestaciones.

Las manifestaciones han dejado entrever, en los últimos meses, una primera toma de disenso público con la postura oficialista: en este sentido asume particular relevancia la carta presentada en el pasado mes de Mayo a favor de la reactivación de la batalla para la Amnistía. Un documento firmado por mas de cien ex presos y presas, inclusive personalidades de grandes recorridos y responsabilidad militante en la lucha armada que, sin criticar abiertamente la actual dirección del proceso para la resolución del conflicto, subrayan como la amnistía asuma en esta fase no la simple agitación de consignas maximalistas, sino un formidable contenido constitutivo por la resolución del conflicto; mas allá de las posibles mecánicas de su aplicación futura. "Mientras no se supere el conflicto político existirán represaliados políticos y mientras hayas represaliados políticos no se podrá dar por superado el conflicto" advierten los firmantes, antes de insistir en que uno de los objetivos estratégicos para la izquierda independentista debe ser el conseguir la libertad de estos reclusos "sin condiciones y con dignidad, sin arrodillarse ante nadie".

6. Marco contradictorio en la Izquierda Abertzale y las coaliciones

Por lo tanto, hay puntos sensibles y matices en la IA y en la coalición nueva formada. Uno de los puntos sensibles es la falta de avances en el proceso de resolución del conflicto y la situación de las y los presos políticos. Eso tiene que ver con la apuesta consciente por llevar a primer plano el eje independentista en su versión de "derecho a decidir", que en opinión de sectores de la IA, sería dejar de lado el componente social y de clase de un proceso de liberación y lo relacionan con la puesta institucional-electoral realizado por toda la Izquierda Abertzale y el resto de fuerzas políticas que crean las distintas coaliciones. En el afán de obtener supuestas mayorías que posibiliten el conseguimiento de la independencia y bajo la influencia de los discursos socialdemócratas e interclasistas de parte de componentes de la coalición, se apuesta por un discurso político reformista; adaptado su propia estrategia a la realidad vigente. Todo ello en un contexto de ofensiva capitalista en marcha que golpea las necesidades reales de amplísimas capas populares y de la clase obrera.

Se buscaría aumentar el techo electoral apelandose a sectores sociales medio, medio-altos, con un discurso "asumible", pero no se da respuesta a las necesidades de los sectores sociales mas precarizados, sobre todo la juventud, las mujeres y l@s migrantes, ni se activa la organización y la lucha de esta nueva composición de clase.

Por otra parte, el grande éxito electoral logrado en diferentes ámbitos y instituciones y después de una década de ilegalización, ha llevado a dar pasos a las instituciones locales y su gestión. Ello ha traído como consecuencia la inversión de cuadros políticos que han pasado a una complicadísima gestión de gobiernos, en un contexto de recortes y con debilidades en un proyecto de transformación reales de esas instituciones.

Hay criticas en el sentido de que en el afán de mantener la confrontación en parámetros de confrontación democrática, la propia Izquierda Abertzale ha actuado, en repetidas ocasiones como "apagafuegos" de las movilizaciones que espontáneamente se daban en la calle; explosiones de rabia ante tanto atropello. En la lectura que se ha hecho, se ha confundido la ausencia de lucha armada con la ausencia de protestas en las calles y con la radicalidad de las luchas y sus formas.

La otra situación de sensibilidad se considera es la falta de debate colectivo y reflexión previa sobre la relación entre instituciones y movimientos populares. Estas discusiones, como otras muchas, han sido muy poco motivadas teniendo en cuenta que se ha salido de una durísima fase, de una dura década, de ilegalizaciones, represión y clandestinidad donde el debate ideológico y la formación militante fue relegada a un segundo plano y se primó la propia supervivencia y la respuesta anti-represiva.

Una reflexión en profundidad es tarea urgente.

N. Bares y M. Rubio

Segunda Asamblea Nacional por la Paz

Territorios con Energia Construyendo Paz para la Nacion

I.- Presentación

Colombia padece un conflicto armado interno que durante más de cincuenta años ha sido uno de los factores que incide negativamente en el bienestar de las comunidades y el desarrollo del país.

El Gobierno colombiano y las FARC-EP iniciaron conversaciones de paz desde noviembre del año 2012, en La Habana. Ya se conocen avances de acuerdos sobre los temas de la agenda relacionados con los puntos: i. Política de Desarrollo Agrario Integral; ii.Participación Política, y iii. Solución al problema de las drogas Ilícitas. Adicionalmente se han dado pasos significativos en la dirección de desescalar la confrontación bélica como el acuerdo sobre desminado y la declaratoria de un cese al fuego unilateral en vigencia desde el pasado mes de diciembre de 2014. Tanto el gobierno como esa organización insurgente, han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo final que implique la dejación de armas y la firma de un cese al fuego definitivo.

Igualmente con el ELN se han iniciado conversaciones desde el año pasado y se avanza en la concertación de la agenda, ubicando puntos centrales como la participación política, construcción de democracia, participación de la sociedad y particularmente de las víctimas, fin del conflicto armado y el cómo van a implementar los acuerdos. También se habla de la disponibilidad del EPL de entrar en conversaciones, aunque no se conoce un pronunciamiento del Gobierno nacional en la misma dirección.

Estos diálogos tienen como propósito el fin del conflicto y una paz estable y duradera. Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso, que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano y en particular a los trabajadores y las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, asentadas en las zonas rurales y en las regiones con recursos minero-energéticos (minería, petróleo, gas) que han sido el epicentro de la intensa confrontación bélica y, en consecuencia, las que más han padecido los rigores de la vulneración de sus derechos fundamentales y constitucionales.

ECOPETROL y la U.S.O. apoyan los esfuerzos que vienen realizando el Gobierno nacional y las guerrillas, en procura de esa paz que tanto anhelan los colombianos y colombianas. Por este motivo, en el marco de los acuerdos

suscritos en la nueva Convención Colectiva de Trabajo se acordó realizar la SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL POR LA PAZ (2ANPP), con el auspicio de Ecopetrol y con la participación, en calidad de convocantes, del Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo y la Universidad Nacional de Colombia.

Como antecedente importante de esta iniciativa, queremos mencionar la realización de la I Asamblea Nacional por la Paz en agosto de 1996 convocada por Ecopetrol, el Gobierno Nacional y la USO. En aquella ocasión se exploraron caminos con las empresas del sector petrolero y con las organizaciones guerrilleras para que "la infraestructura petrolera, sus trabajadores y las comunidades no fueran involucradas en el conflicto armado".

Luego de tres años de conversaciones, la opinión mayoritaria de la sociedad colombiana es que se debe avanzar por la vía de la solución política al conflicto armado interno, que culmine con los acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera. En el mismo sentido se han pronunciado diversos organismos internacionales multilaterales como UNASUR, la Cumbre de las Américas, la Quinta Asamblea de la CELAC, los gobiernos de EE.UU, Reino Unido y Alemania, la Unión Europea; y los gobiernos de Noruega y Chile en calidad de garantes de las conversaciones que se desarrollan en La Habana, Cuba.

II.- OBJETIVOS

Objetivo General

Contribuir desde el sector minero-energético a la construcción participativa y plural de una paz integral, estable y duradera, mediante iniciativas regionales en clave de país, cimentadas en la profundización de la democracia y la promoción permanente de una cultura de paz.

Objetivos Específicos:

1. Promover la reflexión y deliberación de diversos sectores de la sociedad en torno a las dinámicas regionales que requiere Colombia para hacer sostenible la paz a largo plazo.

2. Construir iniciativas en clave de paz relacionadas con el modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos minero- energéticos.

3. Aportar en la consolidación de la democracia y la construcción de una institucionalidad realmente participativa, como requisitos inapelables para el afianzamiento de la paz y el buen vivir de las comunidades.

4. Convenir un mecanismo flexible, amplio, plural, participativo e incluyente que sea un referente de continuidad y viabilidad de las conclusiones y recomendaciones de la 2ANPP

III. –CARÁCTER

La 2ANPP es un proceso amplio, participativo, diverso, incluyente, que favorecerá una deliberación respetuosa, con enfoque diferencial y de género en torno a los tres ejes temáticos que la convocan.

IV. EJES TEMÁTICOS

Eje 1-Política Minero-energética.

Eje 2. Desarrollo Regional y construcción de Paz

Eje 3. Cultura de Paz y Post acuerdos

V.- ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Conversatorios:

Se realizarán cuatro (4) conversatorios así:

Empresarios:

* Gremios empresariales nacionales e internacionales.

* Embajadas de países cuyas empresas tengan negocios en el sector minero-energético.

Academia

* Universidades e Instituciones de Educación Superior

* Centros de Estudios e Investigación relacionados con el tema.

Organizaciones y otros sectores sociales:

* Representantes de las Iglesias.

* Centrales sindicales.

* Organizaciones campesinas

* Organizaciones étnicas, poblacionales y de diversidad sexual

* Organizaciones de víctimas

* Iniciativas de paz.

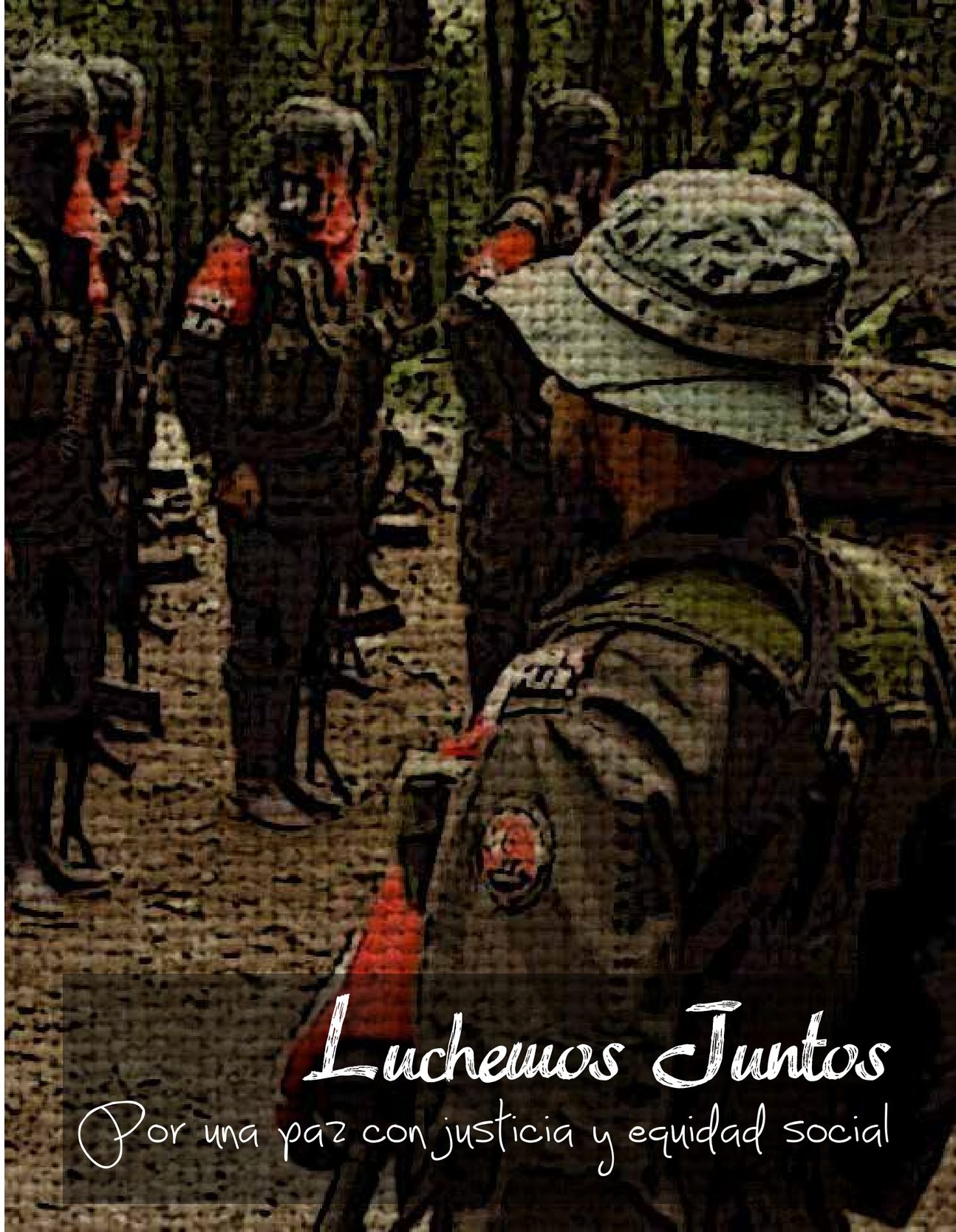
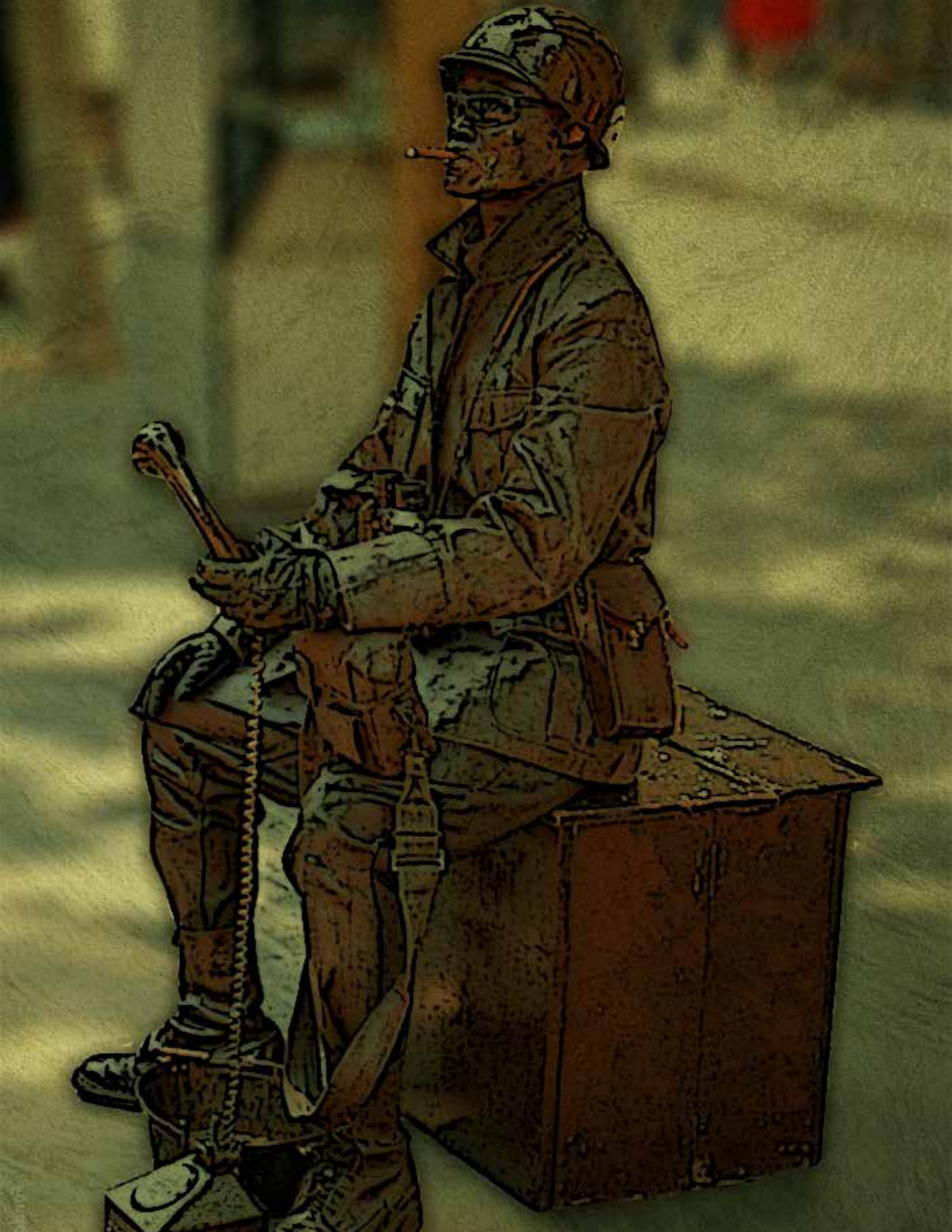
Instituciones de Gobierno y de Estado

* Ejecutivo Nacional, Departamental y Municipal

* Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes.

* Legislativo

* Órganos de control

* Gobierno

Bogotá D.C. Noviembre 19 y 20 de 2015 (Corobrar fecha)